

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., primero (01) de octubre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00319-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **ROSA ELENA FLÓREZ FLORÉZ** identificada con la C.C 51650125 contra **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL**.

ANTECEDENTES

La ciudadana **ROSA ELENA FLÓREZ FLORÉZ** identificada con la C.C 51650125, quien actúa a nombre propio, inicia acción de tutela contra el **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL**, por considerar que se le está vulnerando el derecho fundamental al **DEBIDO PROCESO y DERECHO DE PETICIÓN**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que el día 18 de febrero de 2020 realizó solicitud de desarchivar el proceso No. 2001-00800 en el Centro de Servicios Judiciales Hernando Morales Molina – Archivo Central por intermedio del señor Giovanni González Flores, siendo el término de respuesta de la solicitud 15 días, por lo que el mes de marzo del presente año tenían la obligación legal de brindarle una respuesta oportuna, clara y de fondo.

Que el 03 de septiembre del 2020 mediante correo electrónico dirigido al Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, Archivo Central de Bogotá y Centro de Servicios Hernando Morales, solicitó información sobre el desarchivar el proceso 2001-00800; obteniendo respuesta del Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá quien le informó el procedimiento por medios electrónicos que debe de realizar para dichas solicitudes.

Indica que procedió a realizar el diligenciamiento del formulario electrónico a fin de obtener información sobre su solicitud de desarchive; sin embargo, no ha obtenido respuesta por parte del accionado.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los **DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÓN y DEBIDO PROCESO** y se ordene **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** contestar de fondo la solicitud de desarchive que realizo el día 18 de febrero de 2020 respecto del proceso No. 2001-00800 y que fuera reiterada el 03 de septiembre del 2020 mediante correo electrónico **ARCHIVO CENTRAL DE BOGOTÁ Y CENTRO DE SERVICIOS HERNANDO MORALES**.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Formato solicitud de desarchive
- Copia de la cedula de ciudadanía de la ciudadana **ROSA HELENA FLOREZ FLOREZ**.
- Petición de desarchive dirigida al correo:
archivocentralbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, archivocentralbogota@etbcsj.onmicrosoft.co, centrodeservicioshernandomorales@cendoj.ramajudicial.gov.co, centrodeservicioshernandomorales@etbcsj.onmicrosoft.com ”.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 18 de septiembre de 2020, se ordenó la notificación del **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** y se vinculó al **JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 21 de septiembre de 2020, se notificó al **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** y al **JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Allegaron contestación a la acción constitucional el **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** y el **JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**.

CONTESTACIÓN JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.

El juzgado vinculado refirió: “(...) Este Despacho judicial no ha vulnerado ningún derecho fundamental por cuanto se informó como manifiesta la accionante del procedimiento para efectuar el desarchivar (...) Por lo visto en el formato de desarchivar que adjunta la accionante ya se había informado los datos necesarios del desarchivar, cabe resaltar que este Despacho presto toda la información e informo del trámite requerido, por lo anterior solicitamos la desvinculación del presente proceso por cuanto no vulneramos ningún derecho y por el contrario se dio respuesta explicando el trámite y dando todos los datos necesarios para que el archivo procediera a lo que es de su competencia.

Se deja de presente que en la fecha 27 de agosto de 2020 el Juzgado fue a recoger los procesos desarchivados y fueron digitalizados, sin que a la fecha estuviera el de la referencia de tutela”.

CONTESTACIÓN CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL.

La entidad accionada, refirió: “(...) Que llevada a cabo la búsqueda por parte de la bodega MONTEVIDEOI, quien tiene la custodia de los procesos JURISDICCIÓN CIVIL MUNICIPAL, en relación al proceso con radicado 2001-800 tramitado en el JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL, en el cual figuran las siguientes partes. Demandante: CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS; Demandado: JOEL HENRY MENDOZA JIMENEZ; es importante indicar que luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda con los datos suministrados, dicha bodega a través de la Asistente Administrativa SONIA ESPERANZA VEGA; Informo que pudo hallar el proceso, que el mismo fue DESARCHIVADO y será puesto a disposición del Juzgado para su retiro en Bodeguita Edificio Hernando Morales Molina desde el día 25 de septiembre de 2020 (...)

A su vez, me permito certificar que se da respuesta solicitud desarchivar a la señora ROSA HELENA FLOREZ FLOREZ, mediante correo electrónico ggonzalezf100@gmail.com por ser este medio el más expedito para hacer llegar información y se informa al Juzgado 53 Civil Municipal”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, la ciudadana **ROSA ELENA FLÓREZ FLORÉZ** identificada con la C.C 51650125, sin que se advierta es la titular de los derechos invocados como vulnerados.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, el **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** es quien se encarga de ejecutar labores de desarchivar de los procesos que están a su cargo, además, es a quien se le atribuye vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

INMEDIATEZ

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que el día 18 de febrero de 2020 realizó solicitud de desarchivar el proceso No. 2001-00800 ante el Centro de Servicios Judiciales Hernando Morales Molina – Archivo Central, posteriormente, se reiteró la solicitud en petición elevada a través de canal digital el día 03 de septiembre del 2020, dejando transcurrir un tiempo prudencial para impetrar la presente acción constitucional; por lo que se considera que este requisito está superado.

SUBSIDIARIEDAD

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

El Despacho advierte que con la interposición de la tutela se busca la protección del **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO** y es la vía que encuentra la accionante para asegurar su ejercicio.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los

derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...”

El espíritu de la norma en cita, es la garantía con que cuenta toda persona o la sociedad, para pedir de las autoridades competentes la protección de su derecho de defensa, que le permitan una decisión en justicia, cuando éste se encuentre amenazado por actuaciones judiciales y administrativas ante la inobservancia del principio de legalidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a esta Juzgadora determinar si el **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** y el vinculado **JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, vulneraron los derechos **PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO** de la ciudadana **ROSA ELENA FLÓREZ FLORÉZ** identificada con la C.C 51650125 al no proceder contestar de fondo la solicitud de desarchivar que realizó el día

18 de febrero de 2020 respecto del proceso No. 2001-00800 y que fuera reiterada el 03 de septiembre del 2020 mediante correo electrónico **ARCHIVO CENTRAL DE BOGOTÁ Y CENTRO DE SERVICIOS HERNANDO MORALES**.

Con el escrito de tutela se arrió, formato de solicitud de desarchivar respecto del proceso 2001 800, verificándose que se trata de un proceso de embargo hipotecario, donde actúan como partes Corporación de Ahorro y Vivienda Av Villas y como demandado Mendoza Jiménez Joel Henry, como datos del solicitante se encuentra Giovanni González, y como datos de notificación correo “ ggonzalezftoo@gmail.com” entre otros; con fecha de radicación 18 de febrero de 2020.

Además, se anexo petición desde el correo de GIOVANNY GONZALEZ FLORES [ggonzalezf100@gmail](mailto:ggonzalezf100@gmail.com) con destino a cmpl53bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, bodfontibonbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, archivocentralbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, archivocentralbogota@etbcsj.onmicrosoft.com, centrodeservicioshernandomorales@cendoj.ramajudicial.gov.co, centrodeservicioshernandomorales@etbcsj.onmicrosoft.com ” del que se lee: “la presente es para solicitar información sobre el proceso de desarchivar promovido el 18 de febrero de 2020 del cual no he obtenido respuesta a la fecha. Cordialmente. Giovanni González Flórez”.

El Juzgado 53 Civil Municipal de Bogotá, remitió correo dirigido a la dirección ggonzalezf100@gmail.com indicando: “Le informo que nosotros realizamos los tramites cuando el proceso se encuentra desarchivado, si en el sistema le aparece la ubicación del Juzgado es porque ya se desarchivo, si por el contrario aun sale archivado, revise el archivo adjunto, en este encontrara un correo y puede preguntar si ya se desarchivo su proceso y nosotros lo pasaremos a buscar”.

Por otra parte, del correo consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co dirigido al correo ggonzalezf100@gmail.com de que se lee: “Apreciable Giovanni González Flores. Usted está solicitando el estado en que se encuentra su solicitud de desarchivar, y de acuerdo a la información que ha diligenciado fue radicada con el número :3718 del día 2020-02-18 donde usted nos informa que las partes son: Corporación de ahorro y vivienda Av Villas vs. Joel Henry Mendoza Jiménez y el número de proceso que nos indica:11001400305320010080000 correspondiente al Juzgado 53 Civil Municipal.

Así las cosas, Archivo Central Bogotá le informa que ha recibido su solicitud de consulta y procederá a enviarle un correo electrónico próximamente con el fin de brindarle una respuesta oportuna”.

Ha pregonado la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-523/10: “... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de**

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...” (subrayado por el Despacho).

Con la respuesta a la acción de tutela allegada por **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL** es evidente que se resolvió de fondo la petición de desarchive al indicarse “*el mismo fue DESARCHIVADO y será puesto a disposición del Juzgado para su retiro en Bodeguita Edificio Hernando Morales Molina desde el día 25 de septiembre de 2020*”, aunado a lo anterior se dio contestación de fondo a la petición al correo ggonzalezf100@gmail.com la que coincide con la reseñada en el escrito de solicitud de desarchive y además la petición que fuera elevada 03 de septiembre del 2020, configurándose así un hecho superado.

No obstante lo anterior, advierte el Juzgado que la petición de solicitud de desarchive se efectuó por el señor Giovanni González, quien relacionó como datos de notificación correo “ggonzalezftoo@gmail.com” y en petición que se elevara de manera posterior se advierte que fue el señor González, el solicitante, sin embargo, la tutela es impetrada por la señora **ROSA ELENA FLÓREZ FLORÉZ** identificada con la C.C 51650125, sin que se haya allegado poder y/o escrito mediante el cual se indique al Despacho porque no concurrió el señor **GIOVANNY GONZÁLEZ FLORES** quien ha sido la persona que suscribió la solicitud de desarchive para la fecha del 18 de febrero de 2020 y quien además el 03 de septiembre de 2020 elevó nueva petición, esta vez a los canales digitales autorizados para tal fin.

En la **sentencia SU-173 de 2015**, reiterada en la **T-467 de 2015**, la Corte reitera la legitimación por activa a través de agencia oficiosa es procedente cuando: (i) el agente manifiesta o por lo menos se infiere de la tutela que actúa en tal calidad; (ii) el titular del derecho es una persona en situación de vulnerabilidad, que por sus condiciones físicas o mentales no pueda ejercer la acción directamente; y (iii) el agenciado ha manifestado su voluntad de solicitar el amparo constitucional.

De acuerdo con los fundamentos jurisprudenciales anteriormente señalados y con las pruebas que obran en el expediente, la acción de tutela es improcedente debido a que la accionante no se encuentra legitimada en la causa por activa.

Es necesario enfatizar que la accionante tampoco cumple con las condiciones para ser considerada como agente oficiosa de **GIOVANNY GONZALEZ FLORES**, toda vez que: (i) en el escrito de tutela no manifiesta que actúa en dicha calidad, y (ii) no se demuestra que el señor **GONZALEZ FLORES** no pueda solicitar el amparo constitucional por su propia cuenta. En este sentido, no se encuentra alguna evidencia fáctica que justifique la intervención del juez constitucional, por lo que la acción de tutela es improcedente.

Finalmente se desvinculará al **JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ** atendiendo que con su actuar no se advierte que vulnere y/o haya vulnerado los derechos invocados por la actora.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado por **ROSA ELENA FLÓREZ FLORÉZ** identificada con la C.C 51650125 contra **CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES HERNANDO MORALES MOLINA – ARCHIVO CENTRAL**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE
BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

3410a75a3a0144c00f8b58f7cd94548aa4e26f8960aa4f03dada33875dd538a8

Documento generado en 01/10/2020 05:36:41 p.m.